



Dinámica Evolutiva de la Amenaza del GAO-Comandos de Frontera, en la Frontera Colombo-Ecuatoriana: Conflicto Armado en el Putumayo (2016-2024)

Mayor (EJC) Rodrigo Calderón Rojas

Artículo para optar al título profesional:

Magister en Seguridad y Defensa Nacionales

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia
2025

DATOS GENERALES	
Nombre del estudiante	: Mayor (EJC) Rodrigo Calderón Rojas
Identificación	: 14295725
Programa académico	: Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales
Tutor metodológico	: Henry Mauricio Acosta Guzman
Tutor temático	: Coronel (R) Jose Luis Rico Arenas
Fecha de entrega	: 27 de agosto de 2025
Extensión	: 9.863 palabras

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS

El autor declara que este artículo fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este artículo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas. No se emplearon herramientas de generación de contenido por Inteligencia Artificial para su elaboración.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas.

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

El autor autoriza / no autoriza que este artículo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de acceso abierto.

Dinámica Evolutiva de la Amenaza del GAO-Comandos de Frontera, en la Frontera Colombo-Ecuatoriana: Conflicto Armado en el Putumayo (2016-2024)

Evolutionary Dynamics of the GAO Threat - Border Commands, on the Colombian-Ecuadorian Border: Armed Conflict in Putumayo (2016-2024)

Rodrigo Calderón Rojas¹

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Resumen: La problemática de los Comandos de Frontera (CDF) en la frontera colombo-ecuatoriana. Esta estructura emergió tras el acuerdo de paz de 2016 agrupando personal que había sido integrante de los Frentes 32 y 48 de las FARC así como de la estructura paramilitar la CONSTRU que delinquían en el departamento del Putumayo , con el fin de controlar el negocio del narcotráfico, principalmente. Su actividad criminal, que incluye alianzas con grupos ecuatorianos como Los Lobos, los Choneros y con algunas facciones disputas por el negocio del narcotráfico donde se ha intensificado la violencia, provocado masacres y generado inseguridad transfronteriza. La justificación del estudio radica en la importancia estratégica del Putumayo y la necesidad de comprender cómo los Comandos de Frontera actúan como una amenaza catalizadora del conflicto a nivel

¹ Mayor del Ejército Nacional de Colombia. Estudiante de la Maestría en Seguridad y Defensa nacionales, Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Magister en inteligencia estratégica, Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia “General Ricardo Charry Solano”, Colombia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-6649-710X> Contacto rodrigo.calderon@buzonejercito.mil.co.

transfronterizo, con impactos en la seguridad binacional y el bienestar de la población. Se busca analizar los factores geográficos y las dinámicas criminales. Las conclusiones esperadas, apuntan a describir estos factores y justificar la consideración de los Comandos de Frontera como una amenaza transfronteriza clave, utilizando un enfoque cualitativo y la teoría de conflictos para analizar sus intereses, percepciones y lucha por el poder en la región.

Palabras claves: comandos de frontera (CDF); conflicto armado; frontera; putumayo; seguridad.

Abstract: The problem of the Border Commandos (CDF) on the Colombian-Ecuadorean border. This structure emerged after the 2016 peace agreement, bringing together personnel who had been members of the FARC's 32nd and 48th Fronts, as well as the CONSTRU paramilitary structure, which operated primarily in the department of Putumayo. Its criminal activity, which includes alliances with Ecuadorian groups such as Los Lobos and Los Choneros, and with some factions in dispute over the drug trafficking business, has intensified violence, led to massacres, and generated cross-border insecurity. The justification for the study lies in the strategic importance of Putumayo and the need to understand how the Border Commandos act as a catalyst for cross-border conflict, impacting binational security and the well-being of the population. The objective is to analyze geographic factors and criminal dynamics. The expected conclusions aim to describe these factors and justify considering the Border Commands as a key cross-border threat, using a qualitative approach and conflict theory to analyze their interests, perceptions, and power struggles in the region.

Keywords: Boder Commands (CDF); armed conflict; border; Putumayo; security.

Introducción

En la frontera sur de Colombia, el departamento del Putumayo se ha convertido en un punto neurálgico para el desarrollo de economías ilícitas y la consolidación de estructuras armadas ilegales. Su geografía compuesta por selvas densas, ríos caudalosos, veredas de difícil acceso y extensas zonas rurales representa no solo un reto para la presencia institucional, sino también una ventaja táctica para quienes operan al margen de la ley. A esto se suma la persistente debilidad del Estado en cuanto a cobertura institucional, infraestructura, oferta de servicios públicos y control territorial, factores que, combinados, han configurado un entorno propicio para la expansión del crimen organizado y la reproducción de la violencia armada (Meza, 2015).

En este contexto, tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP en 2016, surgió una nueva generación de actores armados ilegales que buscaron ocupar los espacios dejados por las Extintas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Uno de los grupos que ha cobrado mayor protagonismo en esta zona del país son los Comandos de la Frontera (CDF), una estructura que aglutina excombatientes de los Frentes 32 y 48 de las FARC que no se acogieron al proceso de paz, redes del narcotráfico Hoy los CDF son identificados como un Grupo Armado Organizado Residual (GAOR), pero su funcionamiento va más allá de lo residual: operan con una lógica empresarial, con redes internacionales, y con una capacidad militar y social que los ubica como uno de los principales actores criminales en el sur del país (Ramírez, 2022).

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

A diferencia de otras estructuras armadas, los CDF han sabido consolidar su poder a través del control férreo del territorio, empleando mecanismos de intimidación, amenazas, presión social y cooptación de liderazgos locales. Se han apropiado de corredores estratégicos para el tráfico de drogas, especialmente hacia Ecuador y Brasil, pero también incursionan en la minería ilegal, la extorsión a comerciantes y ganaderos, y en redes de tráfico de migrantes. Esta diversificación del crimen les ha permitido fortalecer su base económica y ampliar su presencia en el bajo Putumayo, una región históricamente afectada por el abandono estatal.

Desde estos territorios, los CDF han logrado proyectar sus acciones criminales hacia el sur del Departamento, cruzando la frontera con Ecuador y generando lo que puede considerarse una internacionalización del conflicto armado colombiano. Este fenómeno ha tenido implicaciones profundas: el recrudecimiento de la violencia en provincias ecuatorianas como Sucumbíos, el aumento de los homicidios selectivos, la expansión de cultivos ilícitos hacia zonas ecuatorianas, y la presencia de laboratorios para el procesamiento de cocaína en ambos lados de la frontera. Todo esto ocurre en un entorno donde las capacidades institucionales son limitadas y la respuesta estatal ha sido, en general, tardía, débil o fragmentada. (Lugo, El País, 2024)

La falta de articulación entre los gobiernos de Colombia y Ecuador ha sido aprovechada por los CDF para realizar sus acciones criminales con relativa impunidad. La coordinación binacional en materia de seguridad, inteligencia y justicia ha sido insuficiente, y las comunidades de frontera quedan atrapadas entre los intereses de los grupos armados y la indiferencia institucional. Esta situación les ha permitido a los CDF actuar como una especie de autoridad paralela: regulan conflictos, aplican "justicia" por su cuenta, imponen

reglas de comportamiento y, en ocasiones, suplantando funciones básicas del Estado. En este contexto, el Putumayo no solo es un territorio bajo disputa, sino también un espacio donde se experimenta un modelo criminal transnacional con capacidad de expansión.

Frente a este panorama, la presente investigación tiene como propósito principal analizar cómo ha evolucionado la amenaza que representan los Comandos de la Frontera en la frontera colombo-ecuatoriana entre 2016 y 2024, y cómo esta ha contribuido a proyectar el conflicto más allá de las fronteras nacionales. Para lograrlo, se establecen tres objetivos específicos: **(1)** describir los factores geográficos del Putumayo que facilitan estas dinámicas ilegales, **(2)** identificar las condiciones actuales de las actividades criminales desarrolladas por los CDF, y **(3)** justificar por qué esta estructura armada debe ser considerada como una amenaza que cataliza y profundiza el conflicto a nivel transfronterizo.

La tesis central que orienta este trabajo parte de la idea de que las condiciones geográficas, sociales y políticas del Putumayo, en especial la ausencia efectiva del Estado, han favorecido una sinergia entre las economías ilícitas y las estructuras criminales, lo cual ha generado el arraigo y expansión de grupos como los Comandos de la Frontera. La combinación de estos factores ha permitido que esta organización logre ejercer un control casi total sobre varias zonas limítrofes, sin enfrentar respuestas estatales integrales ni coordinadas entre Colombia y Ecuador. De mantenerse esta tendencia, la situación podría escalar hacia escenarios de mayor conflictividad, con afectaciones profundas sobre la vida de las comunidades locales, la estabilidad institucional y la seguridad regional.

En conclusión, analizar esta problemática no solo resulta pertinente desde una perspectiva académica, sino también urgente para la formulación de estrategias de seguridad y cooperación binacional más eficaces. El Putumayo y su zona de frontera no pueden seguir siendo un territorio periférico en las agendas de seguridad y desarrollo de ambos países. El futuro de esta región dependerá, en buena medida, de la capacidad del Estado para recuperar su presencia, ofrecer alternativas sostenibles a las comunidades y enfrentar con decisión las estructuras criminales que hoy dictan las reglas del juego.

Metodología

Para responder a la pregunta de investigación: *¿Cuál ha sido la dinámica evolutiva de la amenaza de los Comandos de Frontera (GAOS) en la frontera colombo-ecuatoriana que ha incidido en la internacionalización del conflicto armado desde el departamento del Putumayo (2016-2024)?*, se empleará un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo. Esta aproximación permite obtener una comprensión profunda del fenómeno que se desarrolla en la zona de frontera, así como construir una base sólida para el entendimiento de la configuración actual del conflicto armado en esta región estratégica.

El diseño metodológico adoptado es el estudio de caso, centrado en los municipios del departamento del Putumayo que colindan con el vecino país del Ecuador, donde se ha documentado la presencia activa del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) Comandos de Frontera (CDF). A través de este enfoque, se analizará la evolución del grupo

entre los años 2016 y 2024, así como su incidencia en la internacionalización del conflicto armado.

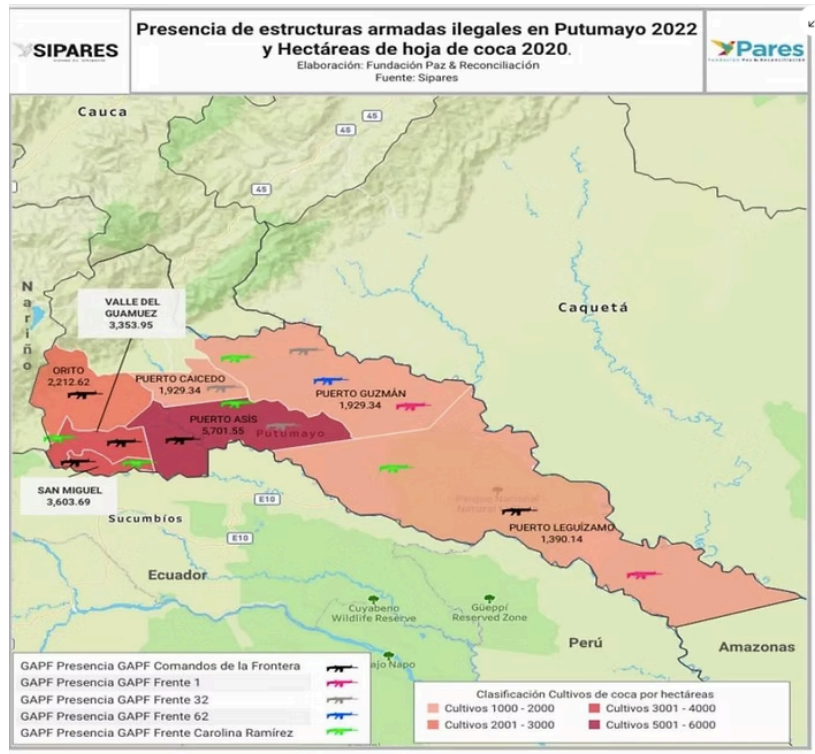
Se emplearán para la recolección de información, La realización de un análisis documental que incluirá la revisión de informes producidos por organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, así como artículos académicos y reportes periodísticos sobre la situación en la frontera colombo-ecuatoriana. Esta revisión documental proporcionará un contexto amplio y detallado sobre la evolución y el accionar del GAO Comandos de Frontera (ACAPS, 2023).

Como parte del proceso de revisión y depuración del texto final, se emplearon herramientas de inteligencia artificial (IA) con el objetivo de mejorar la redacción, coherencia textual y claridad argumentativa del documento. Esta estrategia permitió afinar el estilo académico del trabajo, manteniendo la fidelidad a las ideas originales y asegurando una mayor fluidez en la lectura.

Factores geográficos del departamento del putumayo que facilitan las actividades del crimen organizado en la frontera Colombia-Ecuador

La geografía del departamento del Putumayo juega un papel clave en la dinámica del crimen organizado en la frontera entre Colombia y Ecuador. Su ubicación estratégica, cercana no solo a Ecuador sino también a Perú, convierte a esta región en un corredor natural para el cultivo de hoja de coca y el tráfico de drogas (Bravo, 2020) . Esta cercanía facilita no solo el movimiento de personas y mercancías, sino también el ingreso de insumos esenciales para la producción de pasta base de coca, como gasolina, productos agrícolas y precursores químicos, especialmente desde territorio ecuatoriano (Bonilla, 2019).

En las zonas fronterizas del sur de Colombia, el cultivo de coca ha crecido de manera preocupante. En 2022, se registró que en 45 de los 78 resguardos indígenas del Putumayo había siembras activas, con un promedio de 105 hectáreas sembradas por resguardo. Además, 8 de los 10 resguardos amazónicos con mayor presencia de cultivos ilícitos se encuentran en esta región, lo que representa el 36 % del total nacional dentro de territorios indignas (Montero, 2023). En lugares donde los resguardos indígenas se superponen con áreas protegidas como el Parque Nacional Natural La Paya, en zonas como El Hacha y Puerto Leguizamo, la situación es aún más crítica. Estos territorios han sido tomados por los Comandos de la Frontera, una disidencia armada de las FARC que impulsa la deforestación para abrir espacio al cultivo de coca, despojando así a las comunidades y degradando el ecosistema (Lugo, El Pais, 2024).



Fuente: (Erazo, <https://www.pares.com.co>, 2023)

En la región de la triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú, las alianzas criminales han ganado terreno. Disidencias como los Comandos de la Frontera y Carolina Ramírez, junto a cárteles ecuatorianos como Los Choneros, compiten por el control de las rutas fluviales del río Putumayo, que conectan con Ecuador y los puertos del Pacífico (Montero, 2023). El entorno natural también juega un papel en este complejo panorama. El Parque La Paya, una vasta selva ubicada en Putumayo, está rodeado por los ríos Caquetá al norte y Putumayo al sur. Sus bosques están atravesados por caños, lagunas y múltiples

afluentes que, lejos de ser barreras, se han convertido en autopistas naturales del narcotráfico. Los ríos Putumayo y San Miguel, en particular, permiten la circulación fluida de cocaína hacia Perú y Brasil (Rodríguez, 2023). Como parte de la gran cuenca amazónica, estos ríos forman una red de difícil control, que facilita el avance del crimen transnacional (crisisgroup, 2024).

El Putumayo es una región profundamente amazónica, con una geografía densa y difícil de transitar. La falta de vías de acceso y la precaria infraestructura vial han hecho de este territorio un lugar ideal para que el crimen organizado transnacional se refugie y opere con relativa libertad. La escasa presencia del Estado, sumada al abandono histórico en la triple frontera que comparte con Brasil y Perú, ha dejado vacíos de poder que han sido rápidamente ocupados por grupos armados ilegales (crisisgroup, 2024). En estas condiciones, actores como los Comandos de la Frontera una disidencia compuesta por exguerrilleros de las FARC, exparamilitares y narcotraficantes han establecido su dominio en varias zonas del departamento. Han logrado imponer su control sobre territorios incluso dentro de parques naturales, como La Paya, donde instalan retenes ilegales y organizan cultivos de coca (crisisgroup, 2024) La combinación entre una débil institucionalidad, una infraestructura casi inexistente y una baja cohesión social ha facilitado la expansión de estas economías ilícitas.

Los Comandos de la Frontera no actúan solos. En su estrategia de expansión han tejido redes con organizaciones criminales de Ecuador, Perú y Brasil, lo que les permite controlar rutas clave para el transporte y la comercialización de cocaína a nivel regional. El río Putumayo, vital en esta dinámica, se ha convertido en una vía estratégica bajo su control, donde no solo se movilizan cargamentos ilegales, sino también se ejerce poder armado sobre la población (Vélez, 2025).

Factores geográficos de la provincia de Sucumbíos en Ecuador.

La provincia de Sucumbíos, en el norte de Ecuador, se ha convertido en un punto crítico para la actividad delictiva transnacional, especialmente en su frontera con el departamento colombiano del Putumayo. Esta región combina factores geográficos y socioeconómicos que favorecen el movimiento ilícito de personas y mercancías a través de una frontera altamente permeable. Sucumbíos comparte 129 kilómetros de frontera con Colombia, una línea divisoria compuesta tanto por terreno selvático como por una red de ríos entre ellos el Putumayo y el San Miguel que actúan como rutas naturales para el tráfico ilegal. Estos afluentes, por su caudal, la densa vegetación circundante y la falta de accesos adecuados, son difíciles de vigilar y controlar (Cevallos, 2021) El paisaje de la provincia también juega un papel clave. La topografía es diversa: desde imponentes estribaciones andinas como el volcán Reventador, que alcanza los 3.562 metros de altura, hasta extensas llanuras amazónicas. Esta mezcla crea un entorno perfecto para el ocultamiento y la movilidad, lo que facilita la operación de redes delictivas a través de corredores naturales que cruzan la frontera. Uno de estos es el Corredor Sacha-Shushufindi, una zona de humedales y lagunas que complica el trabajo de las autoridades, impidiendo un control eficaz (Cevallos, 2021) (También destaca la Cordillera del Mirador, una región montañosa utilizada frecuentemente para evadir los puntos de control oficiales (Alexander, 2016). Todo este entorno convierte a Sucumbíos en una pieza clave dentro de la dinámica criminal

transfronteriza entre Ecuador y Colombia, donde la geografía, más que una barrera, se convierte en aliada de los grupos ilegales.

La provincia de Sucumbíos, en la región amazónica del Ecuador, se caracteriza por un clima tropical húmedo, con temperaturas promedio de 28 °C y lluvias frecuentes. Esta condición climática favorece el crecimiento de una densa vegetación, que no solo define el paisaje, sino que también proporciona un entorno propicio para el ocultamiento de actividades ilícitas (Rivera B. , 2020). En este contexto geográfico, el acceso y la conectividad están determinados por infraestructuras como la vía que une Quito con Lago Agrio, una carretera construida originalmente por la industria petrolera. Hoy en día, esta vía se ha convertido en una ruta clave para el transporte ilegal de combustibles y narcóticos hacia la frontera (Rivera B. , 2020) Además, la región presenta un fenómeno preocupante: la existencia de aeropuertos no regulados y pistas clandestinas en áreas selváticas. El aeropuerto de Nueva Loja y diversas pistas ocultas facilitan el tráfico aéreo no registrado, lo que incrementa el riesgo de actividades ilícitas en la zona (Cevallos, 2021).

La geografía compleja de Sucumbíos también está marcada por la presencia de recursos estratégicos. Los ríos Aguarico, Cuyabeno y Putumayo, navegables en buena parte de su trayecto, se utilizan para el transporte fluvial de precursores químicos que terminan alimentando los cultivos ilícitos en el lado colombiano (Alexander, 2016). A esto se suma la actividad petrolera, que ha sido un motor económico pero también un factor de vulnerabilidad social. La llegada de trabajadores temporales atraídos por la industria genera asentamientos informales, los cuales, en ausencia de control estatal, pueden convertirse en espacios ideales para el lavado de dinero o el reclutamiento por parte de redes criminales (Rivera B. , 2020) Por otro lado, muchas comunidades indígenas —como los pueblos Siona-Secoya y Cofán—

habitan a ambos lados de la frontera. Aunque su presencia refleja una rica diversidad cultural y ancestral, la falta de presencia institucional en sus territorios ha sido aprovechada por grupos ilegales, que se movilizan a través de estas zonas bajo el pretexto de intercambios culturales (Cevallos, 2021).

Esta ausencia del Estado se ve reflejada en cifras concretas: el 58,3 % de la población de Sucumbíos vive en áreas rurales, con acceso limitado a servicios básicos. Esta realidad debilita los mecanismos de prevención del delito y profundiza los vacíos institucionales (Lugo, Valentina Parada, 2024). Finalmente, la frontera con el departamento colombiano del Putumayo, históricamente vinculado al cultivo de coca y a la presencia de grupos armados ilegales, representa un desafío permanente. La selva compartida y los ríos que cruzan ambos países facilitan el tráfico de drogas hacia territorio ecuatoriano. Entre las rutas más utilizadas se encuentran el río San Miguel, que conecta Lago Agrio con Puerto Leguizamo (Colombia), y el sendero Cuyabeno Putumayo, un corredor terrestre hacia zonas de procesamiento de cocaína (Lugo, Valentina Parada, 2024).

Crimen organizado en frontera Colombo ecuatoriana

Desde el año 2016, la frontera entre Colombia y Ecuador ha atravesado profundos cambios en el panorama del crimen organizado. Esto ocurrió a raíz de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, un hecho que, si bien marcó el fin de un largo conflicto armado, no significó el cese de la violencia en muchas regiones del país. Lejos de traer tranquilidad a las zonas históricamente controladas por las FARC (McDermott, <https://insightcrime.org>, 2016) .

La desmovilización de esta guerrilla generó un vacío de poder que rápidamente fue aprovechado por otros actores armados y redes criminales. En este nuevo escenario, la frontera colombo-ecuatoriana se convirtió en un espacio estratégico para la reconfiguración y expansión de economías ilegales, muchas veces con mayor complejidad y violencia que antes (Badran, 2023) . Así, lo que comenzó como un proceso de paz terminó transformándose, para muchas comunidades fronterizas, en una etapa de incertidumbre y nuevas amenazas, con un crimen organizado que mutó y se adaptó a la ausencia de las antiguas estructuras insurgentes, pero mantuvo su control sobre el territorio y sus rutas estratégicas.

Tras la firma del Acuerdo de Paz, no todos los excombatientes de las FARC decidieron acogerse al proceso de reincorporación. En particular, antiguos miembros de los frentes 48 y 32 optaron por continuar en la lucha armada, dando origen a nuevas estructuras como los Comandos de la Frontera (CDF). Estas organizaciones han logrado consolidar su presencia e influencia no solo en el departamento del Putumayo, en Colombia, sino también en territorios del lado ecuatoriano, como las provincias de Sucumbíos y Esmeraldas (Orbe., 2020). Lejos de desaparecer, estas estructuras mantienen dinámicas propias del antiguo conflicto armado. Siguen implementando estrategias de control territorial, donde ejercen autoridad de facto en comunidades vulnerables. Además, recurren al reclutamiento forzado, la extorsión, el cobro de “impuestos” a la población y la regulación de actividades ilegales, como el narcotráfico y el contrabando (Lugo, El país, 2025). Esta continuidad de prácticas violentas y coercitivas en la frontera revela cómo, en muchos casos, la transformación del

conflicto no significó su final, sino su adaptación a nuevas realidades geográficas, políticas y criminales.

Estos grupos armados han enfocado sus actividades en economías ilegales como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, aprovechándose de un entorno que les resulta favorable. La geografía selvática, la escasa presencia del Estado y la pobreza persistente en la región crean un terreno propicio para su operación y expansión (McDermott, Jeremy, 2020). En este contexto, Ecuador ha pasado a ocupar un lugar clave dentro de las rutas del narcotráfico transnacional. Su ubicación estratégica, combinada con puertos internacionales y una frontera norte altamente porosa, lo convierten en un punto logístico fundamental para estas redes delictivas, especialmente en las zonas limítrofes con Colombia (Orbe., 2020).

La presencia de Ecuador en las cadenas del narcotráfico no fue inmediata, sino que se dio de forma gradual. Entre los años 2015 y 2019, el país dejó de ser únicamente un territorio de paso para convertirse en una plataforma operativa clave, utilizada no solo para el transporte de drogas, sino también para su procesamiento y almacenamiento. Esta transformación fue posible gracias a las alianzas entre disidencias armadas colombianas y grupos delictivos locales, como la organización ecuatoriana conocida como *Los Choneros* (Bravo-Grijalva, 2020).

En este escenario, los Comandos de la Frontera (CDF) no actúan únicamente como una continuidad de lo que fueron las FARC. Se han convertido en un actor híbrido, que combina características de insurgencia, crimen organizado y control territorial (Rivera J. M.,

2024). Hoy en día, los CDF mantienen una fuerte presencia en zonas rurales del Putumayo, donde imponen su autoridad a través de retenes ilegales, amenazas, normativas paralelas y una red de inteligencia social que les permite vigilar y dominar a las comunidades. Aunque ha habido intentos por parte del gobierno colombiano de entablar negociaciones con algunas facciones disidentes, lo cierto es que estos esfuerzos no han logrado detener sus operaciones delictivas. Esto evidencia que su objetivo principal ya no es político, sino económico, consolidándose como una estructura criminal adaptada al nuevo orden ilegal de la frontera.

Minería ilegal

La minería ilegal de oro en la frontera entre Nueva Loja (capital de Sucumbíos, Ecuador) y el departamento del Putumayo (Colombia) se ha convertido en una actividad transnacional profundamente controlada por grupos armados y bandas criminales. En el lado colombiano, son los Comandos de la Frontera una estructura surgida de las disidencias de las FARC quienes dominan gran parte de la extracción y el comercio del oro. Mientras tanto, en Ecuador, bandas como Los Lobos y Los Choneros han ido ganando terreno en este lucrativo negocio, muchas veces operando en alianza con sus pares colombianos (crime, 2021). La extracción se realiza principalmente en los ríos Putumayo y Caquetá, donde estas organizaciones operan dragas y barcazas artesanales que remueven el lecho fluvial en busca del preciado mineral. Estas embarcaciones, lejos de parecer parte de una operación minera, suelen camuflarse como barcos pesqueros para evitar los controles estatales (Bermeo, 2025).

Los mineros ilegales, muchas veces habitantes locales o migrantes en condiciones precarias, no solo trabajan en condiciones difíciles, sino que además son víctimas de extorsión por parte de los grupos armados. A menudo se les exige entregar parte de su producción, por ejemplo, un gramo de oro al mes como “pago” por el derecho a trabajar.

Ese oro luego es vendido por las bandas a precios más altos en el mercado negro internacional, especialmente en Brasil y Perú (crime, 2021). En el lado ecuatoriano, el problema es aún más complejo. La minería ilegal ha logrado infiltrarse en concesiones legales, que sirven de fachada para operaciones clandestinas. El oro extraído cruza la frontera a través de rutas fluviales y terrestres con escasa presencia estatal, dirigiéndose hacia localidades como Tefé (Brasil) y puntos de acopio en Perú y Ecuador, donde es comercializado y blanqueado por redes criminales de alcance internacional (Bermeo, 2025) En este entorno, los grupos criminales ecuatorianos y las disidencias de las FARC no solo colaboran, sino que también compiten violentamente por el control de rutas, dragas y territorios. Esta disputa ha desencadenado episodios de violencia, desplazamientos forzados y un creciente deterioro de la seguridad en las comunidades locales. El impacto ambiental también ha sido devastador. La minería ilegal ha provocado una deforestación masiva, con la tala de decenas de miles de árboles en áreas que superan las 30 hectáreas solo en Putumayo. Además, la actividad contamina los ríos con mercurio y otros químicos peligrosos, contribuyendo a la degradación acelerada de los ecosistemas amazónicos (Reyes, 2022).

Tanto Colombia como Ecuador han realizado operaciones militares en sus zonas de frontera con el objetivo de debilitar los eslabones clave de las economías ilegales. Estas

acciones han permitido el desmantelamiento de campamentos clandestinos y la destrucción de maquinaria utilizada para la minería ilegal, que además de ser parte del delito, causa un serio deterioro ambiental. Sin embargo, aunque estos golpes logran afectar temporalmente a las estructuras criminales que controlan este negocio, la movilidad de estos grupos y su capacidad para reabastecerse de recursos hacen que el enfrentamiento con las fuerzas estatales sea desigual.

Uno de los mayores obstáculos es la falta de una presencia estatal constante y sostenida en las zonas afectadas. Esta ausencia facilita que la minería ilegal no solo persista, sino que se adapte rápidamente a las nuevas condiciones y controles. En particular, la situación en la cuenca del Putumayo-Içá que abarca territorios de Colombia, Ecuador, Perú y Brasil se ha convertido en un reto urgente, no solo por su escala transnacional, sino también por su estrecho vínculo con el narcotráfico y el lavado de dinero (Bermeo, 2025). La ausencia de control territorial permanente en la frontera colombo-ecuatoriana se explica por una combinación de factores estructurales: la geografía selvática y de difícil acceso, la débil presencia del Estado en áreas rurales, y la consolidación de economías ilegales manejadas por actores armados. En regiones como Putumayo y Sucumbíos, grupos como las disidencias de las FARC, los Comandos de la Frontera y bandas ecuatorianas como Los Lobos y Los Choneros, han llenado ese vacío de autoridad, extendiendo su control sobre actividades criminales como la minería ilegal, el narcotráfico y el tráfico de personas (Amaya Martínez, 2014).

En la frontera entre Colombia y Ecuador, la vida cotidiana de muchas comunidades se ha visto profundamente alterada por la presencia constante de actores armados ilegales.

Estos grupos se desplazan con facilidad por la región, imponiendo sus propias reglas en materia de seguridad, cobrando extorsiones y ejerciendo un control social que reemplaza, en muchos casos, la autoridad del Estado. Los pueblos indígenas, como los Pastos, han sido particularmente afectados. Su forma de vida tradicional se ha visto trastocada por la violencia y el miedo, en un entorno donde lo cultural y lo comunitario luchan por sobrevivir frente al avance de economías ilegales y estructuras criminales. Diversos estudios en el campo geopolítico han mostrado que esta franja fronteriza ha sido históricamente utilizada por grupos como las FARC, no solo para movilizarse, sino para tejer alianzas estratégicas a ambos lados del límite binacional, consolidando zonas de influencia al margen de la legalidad (Calderón, 2012).

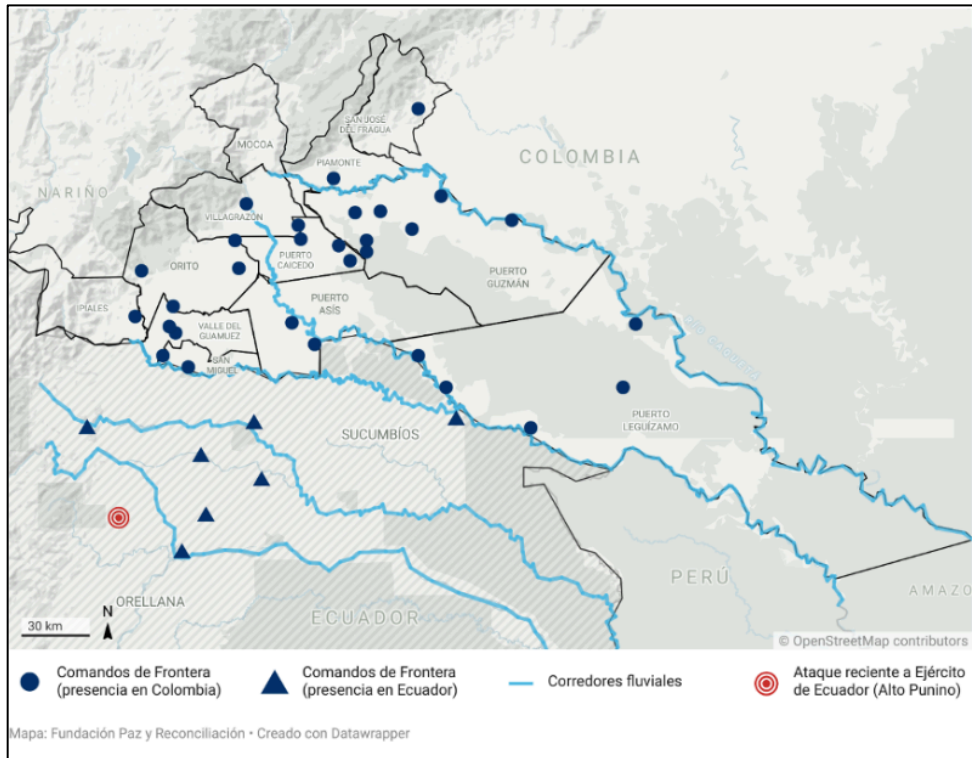
La situación se agrava por la ausencia de una cooperación efectiva y sostenida entre los gobiernos de Colombia y Ecuador. Esta falta de articulación entre ambas naciones ha permitido que las organizaciones criminales actúen con relativa libertad, fortaleciendo su presencia en una región que históricamente ha sido vulnerable. Uno de los focos más críticos de esta dinámica es el corredor entre Lago Agrio (Ecuador) y el departamento del Putumayo (Colombia). Allí, la falta de control territorial es evidente: grupos armados, economías ilegales y una débil institucionalidad estatal configuran el panorama. En este contexto, los Comandos de la Frontera, una disidencia armada colombiana, han expandido su control desde Putumayo hacia Sucumbíos, en el lado ecuatoriano. Este grupo no solo domina rutas clave del narcotráfico y la minería ilegal, sino que también es responsable de la violencia transfronteriza que golpea a las poblaciones locales. Lo más preocupante es que ha logrado establecer alianzas con organizaciones criminales ecuatorianas, como Los Lobos,

consolidando así un corredor delictivo binacional. Esta colaboración criminal aprovecha, e incluso se fortalece, gracias a la ausencia estructural del Estado en buena parte del territorio fronterizo, donde la seguridad, la justicia y los servicios básicos son insuficientes o inexistentes. (Calderón, 2012).

Factores clave de la descontrol territorial

La frontera entre Colombia y Ecuador vive una situación crítica marcada por la ausencia de control estatal, que ha permitido la consolidación de grupos armados ilegales como los Comandos de la Frontera. Esta disidencia de las antiguas FARC se ha expandido desde el departamento colombiano del Putumayo hacia la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, donde controla rutas fluviales como los ríos San Miguel y Putumayo, impone su autoridad mediante extorsiones, retenes y amenazas, y recluta a jóvenes, muchas veces por la fuerza (Ramos, 2025). Su operación no es aislada: han formado alianzas estratégicas con bandas criminales ecuatorianas como Los Lobos y Los Choneros, configurando un corredor delictivo binacional que aprovecha la falta de coordinación entre ambos Estados en este contexto, las economías ilegales han prosperado. El narcotráfico fluye desde los cultivos de coca en Putumayo hasta la ciudad de Lago Agrio, que funciona como punto de salida (Ramos, 2025). hacia los puertos del Pacífico, mientras que la minería ilegal —cada vez más rentable por el alza del precio del oro se extiende a lo largo de las zonas fronterizas, causando graves daños ambientales (Bravo-Grijalva, 2020; El País, 2024). La situación se agrava por la escasa infraestructura, la mala conectividad terrestre y la ausencia de políticas binacionales sostenidas, lo que permite a estas redes criminales operar con impunidad (Ramos, 2025).

figura 1. Presencia de los Comandos de frontera en la frontera norte del ecuador



Fuente : (Fundacion Paz y Reconciliación)

De acuerdo al autor de David en su obra *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice* (1964); este plantea que la insurgencia es una lucha prolongada y metódica cuyo objetivo final es derrocar el orden establecido. Entre las condiciones fundamentales que favorecen una insurgencia están:

Una causa clara y motivadora: La insurgencia debe contar con una razón política, social o económica que movilice a una parte de la población a levantarse contra el gobierno.

Debilidad del gobierno o contrainsurgente: La incapacidad del Estado para controlar eficazmente el territorio o para responder a las demandas de la población genera un espacio para que la insurgencia crezca.

Condiciones geográficas favorables: Territorios aislados, montañosos o rurales que dificultan la acción de las fuerzas gubernamentales y facilitan la movilidad y refugio de los insurgentes.

Apoyo externo: La insurgencia puede recibir financiamiento, armas o apoyo político desde el exterior, lo que fortalece su capacidad de resistencia.

Apoyo o aquiescencia de la población: Galula destaca que para que la insurgencia prospere, debe contar con el respaldo activo o al menos pasivo de una parte significativa de la población. Según él, en cualquier situación hay una minoría activa a favor, una mayoría neutral y una minoría activa en contra; la insurgencia debe depender de la minoría favorable para atraer a la mayoría neutral y neutralizar a la minoría hostil.

Marginalización y pobreza: Estas condiciones sociales actúan como catalizadores que erosionan la legitimidad del gobierno y fortalecen la base social de la insurgencia.

Estas condiciones anteriormente descritas por el autor David Galula; se presentan en la estructura comandos de frontera la cual hace una transversalidad en estas circunstancias que vienen desarrollando. En la zona de frontera entre el departamento del Putumayo en Colombia y Lago Agrio en Ecuador, la expansión de los Comandos de Frontera evidencia de forma clara las condiciones que, según David Galula (1964), permiten que una insurgencia tome forma y se consolide. Estos grupos armados han encontrado una causa que moviliza: el control del negocio del narcotráfico y el rechazo al abandono institucional por parte del Estado. Esto les ha permitido conectar con sectores de la población que viven en condiciones de pobreza prolongada y con pocas o ninguna alternativa económica real.

En el lado colombiano, la presencia del Estado en zonas como Puerto Asís o Puerto Guzmán es frágil o, en algunos casos, prácticamente simbólica. Esta ausencia ha abierto

espacio para que los Comandos de Frontera asuman roles que van desde la imposición del orden hasta la administración de justicia, desplazando así las funciones gubernamentales. En el caso de Ecuador, si bien la acción estatal es más activa, no ha sido suficiente para frenar la expansión de estas estructuras ilegales, debido en parte a la porosidad de la frontera, la limitada capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y fenómenos de corrupción local que facilitan la operación de redes criminales en la provincia de Sucumbíos, especialmente en los alrededores de Lago Agrio (aleyre, 2010)

La geografía juega también un papel fundamental, Las características del territorio selva densa, caminos limitados, baja presencia estatal facilitan que estos grupos se desplacen, se oculten y mantengan centros de operación con relativa libertad. A esto se suma su capacidad para articularse con redes de narcotráfico transnacionales que conectan Colombia y Ecuador con mercados internacionales, lo que les da poder financiero y logístico.

Los Comandos de Frontera no han logrado mantener su influencia únicamente por la fuerza. En muchas zonas rurales han obtenido cierto nivel de tolerancia y en algunos casos, apoyo activo por parte de comunidades empobrecidas que los ven como una alternativa frente a la ausencia del Estado: una fuente de ingresos, de protección o incluso de representación local, Así, todas las condiciones descritas por Galula una causa movilizadora, debilidad estatal, geografía favorable, apoyo externo y respaldo social se presentan de manera simultánea en esta región fronteriza, permitiendo la consolidación de una insurgencia criminal que trasciende las fronteras nacionales y desafía la soberanía de ambos Estados.

Condiciones de las dinámicas en la frontera del departamento del Putumayo

En el departamento del Putumayo, la presencia de los Comandos de Frontera (CDF) ha transformado profundamente la vida de sus comunidades. Este grupo armado ilegal, surgido hacia 2019 tras la unión de disidencias de las FARC-EP con redes criminales como "La Constru" y "La Mafia Sinaloa", no solo consolidó una estructura armada poderosa, sino que también impuso una nueva forma de control sobre amplias zonas del territorio. Municipios como Puerto Caicedo, Puerto Guzmán y Puerto Asís se han convertido en escenarios cotidianos de este dominio (Ramos, 2025).

Pero detrás de los nombres y los mapas de control, hay familias enteras que viven bajo la presión constante de actores armados, economías ilícitas y la falta de presencia efectiva del Estado. La lucha por el territorio no es solo entre grupos ilegales o fuerzas del orden; también afecta profundamente a quienes trabajan la tierra, crían a sus hijos y resisten desde lo cotidiano. Esta pugna involucra intereses cruzados: desde el narcotráfico hasta actividades extractivas como la minería y la explotación petrolera, todo en un entorno donde la institucionalidad es frágil y las tensiones sociales se multiplican (Rio, 2022).

El narcotráfico sigue siendo el eje estructurador del poder de los CDF. Su capacidad para movilizar cocaína hacia mercados internacionales a través de corredores que cruzan Ecuador y Perú no solo les garantiza recursos económicos, sino también influencia política y social. Este poder se ejerce de forma directa sobre la población: se impone el cultivo de coca como única opción viable de sustento, se amenaza o asesina a líderes sociales, y se infiltran instituciones locales para cooptar decisiones y perpetuar su control (Patiño, 2024).

Frente a esta realidad, el miedo, la resignación y la adaptación son estrategias de sobrevivencia. La ilegalidad no es un fenómeno aislado ni espontáneo; es un sistema que se sostiene sobre la exclusión, la pobreza y el abandono histórico. Humanizar esta situación es reconocer que detrás de cada estadística hay personas que, día a día, intentan construir una vida digna en medio del conflicto.

Todo esto sucede en un territorio donde el Estado llega con dificultad y muchas veces, apenas como una presencia simbólica. En estas zonas del sur del país, la vida se desarrolla entre la fragilidad institucional y la fuerza impuesta por actores armados como los Comandos de Frontera. Comprender lo que ocurre en el Putumayo no es solo hablar de cifras, rutas del narcotráfico o actores ilegales; es mirar con atención el dolor, la historia y la resistencia silenciosa de las comunidades que viven bajo la sombra de estas dinámicas criminales.

Los CDF no surgieron de la nada. Su consolidación es el resultado de un largo camino marcado por el abandono estatal, el impacto profundo del conflicto armado y una economía ilegal que se convirtió en el sustento y muchas veces, en la única opción para miles de familias. La coca, más que una planta, representa en muchas veredas la posibilidad de comer, de sostener a los hijos, de pagar un transporte. Pero también significa estar expuesto a amenazas, a reglas impuestas a la fuerza, a un control que se ejerce no solo con armas, sino con miedo.

Mientras tanto, el territorio sigue siendo disputado. No solo por los CDF, sino por múltiples actores, legales e ilegales, que ven en estos corredores hacia Ecuador y Perú una oportunidad estratégica. Y en medio de esas disputas están las comunidades, atrapadas entre la incertidumbre y la ausencia de garantías básicas. Donde no hay justicia ni servicios, surgen

otras formas de poder: grupos armados que dictan normas, que castigan, que regulan la vida como si fueran Estado.

Así, el Putumayo vive una realidad compleja, donde la violencia no siempre es visible, pero sí constante. Los Comandos de Frontera no son solo una amenaza armada: son una expresión de un problema mucho más profundo, que tiene raíces en la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades reales para vivir dignamente. Entender esta realidad exige sensibilidad, conciencia territorial y un compromiso decidido con la transformación estructural de estas regiones (Ramos, 2025).

Condiciones Económicas

En el departamento del Putumayo, la economía no solo se ve afectada por la pobreza estructural o la falta de infraestructura, sino también y de manera profunda por la presencia constante de actores armados ilegales. Entre ellos, los Comandos de la Frontera (CDF) han logrado imponer un dominio que no se limita a lo militar: controlan territorios, decisiones y, sobre todo, la vida diaria de quienes habitan estas regiones. En muchos caseríos y veredas, moverse, hablar o incluso tener un celular puede ser motivo de sospecha. Revisiones arbitrarias, trabajos forzados y pagos obligatorios impuestos por los Comandos son parte del día a día (Parada Lugo, 2025).

Este control permanente genera una atmósfera de miedo e incertidumbre que paraliza la vida productiva. La gente vive vigilada, limitada, con sus posibilidades económicas asfixiadas por normas impuestas desde la ilegalidad. Quienes intentan emprender un negocio formal o mantener una actividad comercial tradicional se encuentran con barreras invisibles

y muchas veces, amenazas visibles que los obligan a ceder, a guardar silencio, o simplemente a desistir (Putumayo, 2022).

En este ambiente, muchos terminan recurriendo a lo único que parece funcionar: las economías ilegales. Cultivar coca o participar en la minería ilegal se vuelve, más que una elección, una salida de emergencia. Son caminos marcados por el riesgo y la explotación, pero también por la necesidad. Estas actividades no solo fortalecen el poder económico de los grupos armados, sino que también perpetúan un círculo donde la población queda atrapada entre la falta de opciones legales y las exigencias impuestas con fusil en mano (Ramos, 2025).

Las cifras lo confirman. Para 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) del Putumayo representaba apenas el 0,36% del total nacional, según datos del (Dane, 2025) Aunque hay sectores como la minería, el comercio y la administración pública que impulsan parte de la economía local, lo cierto es que la contribución del departamento sigue siendo baja. Esto no significa que Putumayo no tenga potencial, sino que su desarrollo sigue frenado por un contexto de inseguridad, ausencia estatal y dinámicas ilegales que limitan profundamente las oportunidades de vida digna para su gente

Reclutamiento forzado

En el Departamento del Putumayo, ser niño o niña en ciertas zonas significa crecer bajo la amenaza constante del reclutamiento forzado. Aunque el conflicto armado ya no ocupa los titulares como antes, su sombra sigue presente en muchas veredas y comunidades rurales del sur del país. Los Comandos de la Frontera, grupo armado ilegal con fuerte

presencia en el departamento, mantienen un control implacable en regiones estratégicas, especialmente en zonas fronterizas y de difícil acceso. Allí, la niñez vive con restricciones de movimiento, confinamientos forzados y el temor latente de ser arrancada de su hogar para convertirse en parte de una estructura armada (Departamental, 2025).

En el año 2024, se documentaron oficialmente 24 casos de reclutamiento forzado en el Putumayo. Puerto Leguizamo fue el municipio más afectado, pero las cifras no reflejan toda la realidad. Detrás de estos números hay historias silenciadas por el miedo, por la presión social y por el control que ejercen los grupos armados sobre las comunidades. La Defensoría del Pueblo reportó 21 casos en ese mismo año, confirmando la gravedad de un fenómeno que, aunque muchas veces invisible, sigue arrebatando infancias (Defensoría, 2025).

El reclutamiento no siempre ocurre de forma directa o inmediata. A menudo se da a través de amenazas, trabajos forzados o violencia abierta contra las familias. En muchos casos, los menores no son llevados con armas, sino con promesas vacías o bajo coerción emocional, aprovechando el abandono estatal y la falta de oportunidades. Es en estos lugares donde el Estado ha llegado poco o nunca, donde los actores armados se presentan como la única autoridad y donde la desesperanza se convierte en terreno fértil para la manipulación (Departamental, 2025).

Las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo han advertido sobre escenarios de alto riesgo en al menos nueve municipios del Putumayo. Estas situaciones no solo provocan el reclutamiento de menores, sino también desplazamientos forzados, la ruptura del tejido comunitario y el cierre de caminos hacia servicios básicos como educación, salud y protección. Para muchas familias, la única alternativa es huir, si pueden, o resistir en silencio, esperando que el conflicto no se lleve también a los suyos.

Existen programas e iniciativas institucionales para atender esta problemática, como las del ICBF, pero la realidad en terreno sigue siendo compleja. Mientras el conflicto persista y los Comandos de la Frontera continúen ejerciendo poder armado en amplias zonas del departamento, erradicar el reclutamiento forzado seguirá siendo un desafío inmenso (ICBF, 2015). Lo que está en juego no son solo estadísticas: son vidas, proyectos de futuro y derechos fundamentales de una generación entera que merece crecer lejos del miedo y la violencia, a continuación de manera descriptiva se presentan las estadísticas de los niños niñas y adolescentes que han sido reclutados por estos actores criminales en el departamento del putumayo.

Año	NNA Desvinculados (ICBF)
2016	12
2017	15
2018	9
2019	14
2020	11
2021	18
2022	16
2023	13
2024	10

Fuente: ICBF

Cultura de la ilegalidad.

Hablar de la cultura de la ilegalidad en el Putumayo es hablar de una realidad compleja, tejida por años de abandono, resistencia y adaptación forzada. Esta cultura no surgió de la noche a la mañana, sino que ha sido moldeada por una historia marcada por la pobreza, el conflicto armado, la exclusión y una presencia estatal que, en muchos lugares, ha sido más simbólica que efectiva. Desde finales de los años setenta, el narcotráfico encontró

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”

Bogotá D.C., Colombia

en este territorio no solo una fuente de materia prima para la producción de drogas, sino también un escenario ideal para crecer: selva espesa, fronteras abiertas y comunidades olvidadas (Florez, 2003). Para muchas familias, la coca no fue una elección libre, sino la única alternativa económica frente a la indiferencia del Estado y la falta de oportunidades reales.

La coca terminó arraigándose en la vida cotidiana, no solo como cultivo, sino como parte del entramado social y cultural del territorio. Se convirtió en un medio de inclusión, aunque fuese dentro de un sistema ilegal, para quienes nunca fueron incluidos en el modelo económico formal (Rueda & Cajiao, 2025). En ese contexto, hablar de legalidad es un lujo distante, casi utópico. Aquí, donde la escuela a veces no llega, donde los caminos están sin pavimentar y el acceso a salud es limitado, las reglas son impuestas por actores armados que han ocupado los vacíos institucionales.

Las disidencias de las FARC y los Comandos de la Frontera son quienes mandan en muchas veredas. Ellos establecen los horarios, administran justicia y deciden quién puede hablar y quién no. Cualquier forma de disidencia se paga caro, ya sea con el exilio, con el silencio obligado o, en el peor de los casos, con la vida misma (crisisgroup.org & ONU, DH, 2023) Las comunidades viven entre el miedo y la necesidad, entre la obediencia y la búsqueda desesperada de sobrevivir.

En este escenario, más que juzgar a quienes viven de la coca, hay que entender el porqué. La ilegalidad no es solo una elección individual es el resultado de una estructura que históricamente ha excluido y marginado. Cambiar esta realidad exige algo más que operativos militares o erradicación forzada. Requiere una intervención integral, que

dignifique la vida, fortalezca el tejido social y devuelva la confianza en un Estado que hoy, para muchos, solo existe en el papel (Bohórquez, 2021).

La cultura de la ilegalidad en el Putumayo no puede entenderse solo desde la presencia de grupos armados o de economías ilícitas. Es, más bien, la consecuencia de un abandono histórico, de una institucionalidad que llegó tarde cuando llegó y de una violencia que ha calado hondo en la cotidianidad de sus habitantes. Para muchas familias, lo ilegal dejó de ser un delito y se volvió una rutina. No por falta de valores, sino por falta de opciones. Sobrevivir en estos territorios a veces significa moverse en la delgada línea entre lo permitido y lo prohibido, entre lo informal y lo ilegal.

A pesar de este panorama, las comunidades no han dejado de resistir ni de proponer. Los pueblos indígenas, como los Inga y los Awá, han construido alternativas desde sus propios saberes, con respeto por la tierra, por la vida y por su cosmovisión. Sin embargo, sus esfuerzos chocan con una institucionalidad que muchas veces no los escucha o no logra articularse (Unodc, 2021). Las mujeres, por su parte, viven de forma más cruda las consecuencias de esta ilegalidad. En lugares como Puerto Asís o San Miguel, cargar con el peso de la familia, enfrentar la violencia de género y al mismo tiempo sobrevivir en medio de la amenaza constante, las convierte en el soporte silencioso de sus comunidades (FIP, 2019). De acuerdo a Mejía 2008 donde se retrata cómo prácticas violatorias, como la corrupción y el nepotismo, han permeado la identidad social colombiana, configurando una "cultura mafiosa" que funciona como mecanismo de legitimación ante la debilidad institucional, se hace un paralelo donde los elementos claves de su obra se ajustan con las dinámicas sociales en el Departamento del putumayo. Como se muestra en la Tabla 1, existen

similitudes claras entre los patrones de cultura mafiosa descritos por Mejía Quintana (2008) y la realidad sociopolítica actual del Putumayo.

Tabla 1 : Comparación Teoría Mejía Quintana

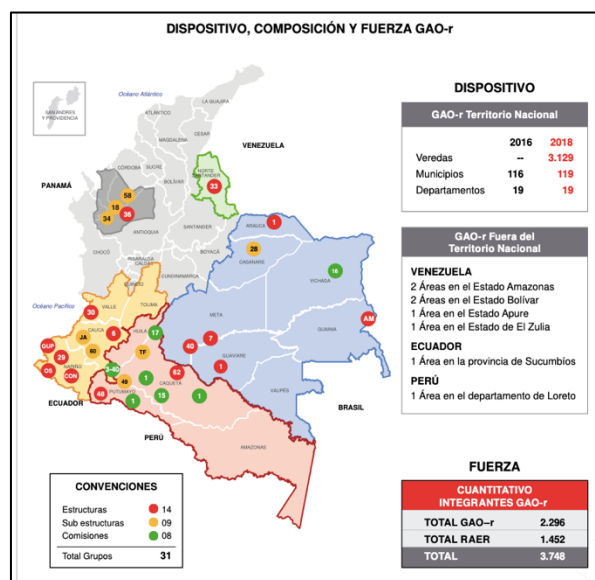
Elemento Clave en Mejía Quintana	Manifestación en Putumayo (2025)
Poder paralelo y legitimación informal	Comandos de la Frontera regulan cotidianidades, cobran 'vacunas' y administran justicia informal.
Cultura del silencio y naturalización	La ilegalidad se normaliza, hablar o actuar es arriesgado y difícil.
Estado debilitado y clientelismo armado	Presencia estatal limitada, mientras grupos ilegales asumen funciones gubernamentales.
Influencia de la economía ilícita	Coca como principal motor económico, legitimación cultural de su producción.
Violencia como mecanismo de control	Toques de queda, amenazas, masacres, desplazamientos y control social.

Fuente: elaboración propia

Justificar las razones de considerar a los comandos de frontera como una amenaza catalizadora del conflicto a nivel transfronterizo.

Amenazas Persistentes

Para el año 2020 en la Guía de planeamiento del Ejército Nacional se hacía referencia de la presencia de estructuras del GAOR, En el departamento del Putumayo, donde se mantiene una fuerte presencia como parte de su área de influencia en la región Sur. Este grupo se financia principalmente a través del narcotráfico y la minería ilegal, actividades que continúan en expansión. La demanda creciente de estas economías ilícitas ha generado mayores ingresos para estas estructuras criminales, afectando gravemente la seguridad y estabilidad del territorio (Ejército Nacional , 2020)



Fuente: (Ejército Nacional , 2020)

Transfronteriza amenaza transnacional.

En los últimos meses, la violencia en la provincia ecuatoriana de Orellana, vecina al departamento del Putumayo, ha escalado de forma alarmante. Cinco masacres recientes en esa zona han sido atribuidas a una lucha sangrienta por el control territorial y económico entre dos actores criminales de peso: los Comandos de la Frontera (CDF), disidencia armada colombiana que actualmente participa en mesas de negociación con el gobierno colombiano, y Los Choneros, una estructura ecuatoriana con vínculos con el cartel de Sinaloa (Velez, 2025)

Aunque los Comandos de la Frontera han encontrado en Ecuador un espacio estratégico para establecer zonas de retaguardia ante la presión militar en el Putumayo colombiano, su interés en el país vecino va más allá. Además de usar territorio ecuatoriano como corredor del narcotráfico hacia el océano Pacífico, en los últimos tiempos la minería ilegal ha cobrado una importancia creciente en sus operaciones y se ha convertido en uno de los principales factores detrás del aumento de la violencia en el norte de Ecuador.

Esto se debe, en parte, a que el negocio de la extracción ilegal de oro se ha vuelto extremadamente lucrativo, impulsado por el alza constante del precio del mineral y las dificultades del Estado para controlar este tipo de actividades, especialmente en zonas remotas de la Amazonía (Taboada López, 2023). En contraste, el mercado de la cocaína ha mostrado signos de inestabilidad, con caídas en los precios y menor rentabilidad en regiones como el Putumayo (Infobae, 2024).

Grupos criminales como Los Lobos llevan años participando en la minería ilegal en distintas zonas del país, desde las provincias del norte y nororiente amazónico como Imbabura, Napo, Orellana y Sucumbíos hasta regiones del sur como Azuay y Zamora Chinchipe (Mongabay, 2024). Por otro lado, Los Choneros han comenzado a intervenir en esta economía recientemente, especialmente en el norte ecuatoriano. Su llegada parece haber sido impulsada por la necesidad de protección solicitada por operadores de minas ilegales, quienes eran víctimas de extorsiones tanto de Los Lobos como de los Comandos de la Frontera. Así, aunque inicialmente Los Choneros no tenían previsto ingresar a la Amazonía, encontraron allí una oportunidad de expansión (Ojo Público, 2024a).

Para el año 2025 los comandos de frontera realizaron una de las acciones más fuertes contra las fuerzas de seguridad del estado en territorio Ecuatoriano, Durante una operación contra la minería ilegal en la zona selvática de Alto Punino, provincia de Orellana, un escuadrón de la Brigada de Selva 19 Napo del Ejército ecuatoriano fue emboscado por los Comandos de la Frontera (CDF). El ataque, ejecutado con explosivos, granadas y fusiles, dejó un saldo trágico de once militares muertos: dos tenientes, siete cabos, un sargento y un soldado. También murió un integrante del grupo armado, La operación fue dirigida por alias “Compadre”, cabecilla local del CDF, quien contaba con unos 30 hombres bajo su mando y mantenía vínculos con el grupo criminal ecuatoriano “Los Lobos”. Los cuerpos de los militares fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal en Lago Agrio, Este hecho, de suma gravedad en el contexto del conflicto transfronterizo reciente, generó una fuerte reacción del gobierno de Ecuador, elevando la tensión diplomática con Colombia y reforzando las medidas militares en la frontera (Niño, 2025) .



Fuente : (ecuatoriano, 2025)

Influencia de los comandos de frontera en la población

Los Comandos de la Frontera (CDF) ejercen una influencia profunda y multifacética en las provincias fronterizas del Ecuador, como Sucumbíos y Orellana, mediante prácticas sistemáticas de violencia, control social y economía ilícita, lo que ha deteriorado gravemente el tejido social y la gobernanza local. Desde 2019, la violencia se ha incrementado drásticamente, pasando de 27 homicidios anuales en Sucumbíos a 176 en octubre de 2023, con masacres, asesinatos selectivos y ataques contra militares (Redacción, 2025) Los Comandos de Frontera han establecido un régimen de terror imponiendo normas de convivencia que regulan la movilidad, las visitas y la resolución de conflictos, reemplazando estructuras estatales y generando desconfianza comunitaria, así como un aumento a las muertes violentas, que en su mayoría, corresponden a ajustes de cuentas entre distintas facciones de Los Choneros y la narcoguerrilla Los Comandos de la Frontera (CDF), que se

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

disputan las redes de la minería ilegal, en el caso de Orellana. Ya en Sucumbíos (Ecuador), el control de los Comandos de Frontera es total. Este grupo armado se ha dedicado a eliminar a cualquier amenaza de bandas ecuatorianas que busquen expandir su control hasta esta provincia, que es fronteriza con Colombia, (Primicias, 2024). A continuación se detalla el organigrama de la estructura de los comandos de frontera. (@EEcolombia2020, 2022)



Fuente : (@EEcolombia2020, 2022)

A su vez, aprovechan la debilidad estatal para expandir actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico, lo que produce dependencia económica, destrucción ambiental y reclutamiento forzado, especialmente de jóvenes así mismo Documentos reservados y fuentes vinculadas a investigaciones en curso señalan que la organización ha extendido sus operaciones de lavado de dinero a mercados internacionales, incluyendo

inversiones en bienes raíces en Europa. El operador principal de estas transacciones sería un individuo identificado con el alias de “Gerente”. (La silla, 2025), igualmente los medios de prensa del Ecuador han venido registrando golpes contundentes contra la estructura comandos de frontera así como a bandas locales que azotan la tranquilidad de los residentes en estos sectores.

Es así que para el día 13 de febrero de 2025, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó el operativo “Gran Fénix 08” en varias provincias, desarticulando una estructura criminal vinculada a los GAO «Los Lagartos» y «Comandos de Frontera», dedicada al narcotráfico, sicariato, extorsión y tráfico de armas. Tras dos años de investigación por parte de la UNIDOT y la UIAN, se realizaron 15 allanamientos que dejaron 14 detenidos, incluidos dos Objetivos de Alto Valor —Darwin G., alias “Patrón”, y Marcelo Q., alias “Cerapo” y un Objetivo de Intermedio Valor, Juan S., alias “Ratón”. La organización, que operaba a gran escala en múltiples provincias y usaba fincas y negocios fachada, mantenía un corredor de tráfico ilícito de gran alcance y se incautaron más de 7,8 millones de gramos de drogas (Noticias, 2025).

El 29 de mayo de 2025, en Portoviejo, la Policía Nacional del Ecuador, mediante el operativo “Fénix 158” de la DINASED PERFILACIÓN y en coordinación con la Fiscalía, capturó a Cristhian S. T., alias “Chirikano”, de 19 años, presunto miembro del GAOR “Comandos de Frontera” liderado por alias “Gabino”. Este grupo, activo en Orellana, Sucumbíos y Manabí, estaría implicado en sicariato y narcotráfico, y las investigaciones vinculan a “Chirikano” con ocho ataques cometidos entre enero y marzo de 2025 que dejaron

trece muertos, varios de ellos integrantes de “Los Choneros”, en el marco de una disputa por control territorial y actividades ilícitas (Comunicamos, 2025)

Dinámicas transnacionales

Desde hace varios años, algunos sectores de Sucumbíos (ecuador) dejaron de ser simples poblaciones fronterizas para convertirse en centros de intercambio y transacciones del delito de narcotráfico. En este sector llegan cargamentos del alcaloide como si se trataran de cualquier producto de pan coger producido en esta parroquia o proveniente del Departamento del Putumayo, además de esta dinámica existen operadores designados para cerrar tratos y sellar acuerdos, como si se tratara de una empresa. Esta organización criminal no solo gestiona la droga que proviene del Putumayo colombiano, sino que ha logrado absorber a grupos como 'La Constru', antigua estructura paramilitar colombiana; fortaleciendo así sus conexiones con poderosos carteles internacionales, entre ellos el de Los Balcanes, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho de Brasil. A nivel local, mantienen alianzas con bandas ecuatorianas como Los Lobos, ampliando su red de influencia y control en la región. (Ruiz., 2025). Siendo así con este panorama otro factor dinamizador es el aumento de los cultivos de hoja de coca en el Departamento del putumayo, así.

Cultivos de coca en Colombia (2019–2023)

Datos oficiales de la UNODC citados por medios confiables como El Espectador, AP, Reuters y El País.

Año	Área estimada de cultivos de coca (hectáreas)	Fuente
2019	154.000 ha (9% menos que en 2018)	UNODC
2020	143.000 ha (7% menos que en 2019)	UNODC
2021	204.000 ha (aumento del 43% respecto a 2020)	UNODC
2022	230.000 ha (13% más que en 2021)	UNODC
2023	253.000 ha (aumento del 10% respecto a 2022)	UNODC

Fuentes: Informes de monitoreo de la UNODC (2019–2023) y artículos de El Espectador, AP, Reuters y El País.

Los Comandos de la Frontera (CDF), en asocio con actores criminales locales, se encargan de controlar las principales rutas del tráfico de cocaína que se originan desde el departamento del Putumayo (Colombia), hacia los centros de acopio que se encuentran ubicados en el interior del Ecuador para luego, movilizar la droga hacia los puertos de Manabí y Guayas, en la costa del Pacífica ecuatoriana, Desde allí, los cargamentos son enviados a mercados internacionales, principalmente en Norteamérica, Europa y Asia, consolidando así una red de narcotráfico transnacional altamente estructurada y eficiente que deja ganancias económicas para estas estructuras narcotraficantes y a su paso muertes y desolación en el vecino país (Ruiz., 2025).

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia



Fuente: policía nacional

Conclusiones

El análisis de la dinámica evolutiva de la estructura los Comandos de la Frontera (CDF) que delinquen en la frontera colombo-ecuatoriana entre 2016 y 2024, permite concluir que este grupo ha consolidado un ecosistema criminal altamente adaptativo, cuya permanencia y expansión se sustentan en la combinación de factores geográficos, sociales y políticos característicos del departamento del Putumayo.

En primer lugar, la geografía estratégica del Putumayo, marcada por una densa red hidrográfica, extensas selvas y una amplia línea limítrofe con Ecuador, ha proporcionado a los actores ilegales un entorno propicio para el transporte encubierto de drogas, el establecimiento de rutas seguras y el ocultamiento de campamentos. Esta configuración territorial, difícil de controlar de manera efectiva, ha sido explotada por los Comandos de la Frontera para optimizar su movilidad táctica y garantizar la continuidad de sus economías ilícitas.

En segundo término, las dinámicas criminales desarrolladas por esta estructura combinan el control social, la cooptación comunitaria y la administración de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Estas actividades se sostienen mediante una gobernanza criminal que sustituye, en buena parte del territorio, la presencia legítima del Estado. La capacidad del grupo para gestionar redes transfronterizas de producción, transporte y financiamiento demuestra un alto nivel de especialización y resiliencia frente a las acciones militares y policiales.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

Finalmente, los Comandos de la Frontera representan una amenaza catalizadora del conflicto armado transnacional, dado que su influencia traspasa los límites nacionales y se proyecta hacia un contexto regional. La debilidad institucional en zonas fronterizas, junto con la falta de medidas contundentes y sostenidas por parte de los gobiernos de Colombia y Ecuador, ha favorecido un espacio de acción libre que fortalece sus operaciones y les permite consolidar alianzas con otras estructuras criminales internacionales.

Referencias

- Alexander, V. T.-A. (2016). La frontera global. Análisis de los flujos de narcotráfico en la frontera norte ecuatoriana. Ecuador : Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.
- Amaya Martínez, L. F. (1 de octubre de 2014). Geopolítica de las FARC. La frontera Ecuador-Colombia: escenario de relacionamiento, tensión y cooperación en la cuestión de la seguridad fronteriza, 1995 - 2014. Geopolítica de las FARC. La frontera Ecuador-Colombia: escenario de relacionamiento, tensión y cooperación en la cuestión de la seguridad fronteriza, 1995 - 2014. Quito , Quito , Ecuador : Flacso Ecuador .
- Badran, F. (2023). The signing of the peace agreement in Colombia. Old wine in new skins: Implications for national security and organized crime. Trends in Organized Crime, 25.
- Bermeo, E. (11 de Febrero de 2025). <https://cuencaputumayoica.com/>. CuencaPutumayoica: <https://cuencaputumayoica.com/la-mineria-ilegal-en-la-cuenca-putumayo-ica-impactos-y-desafios-para-la-conservacion/>
- Bonilla, M. A. (27 de marzo de 2019). insightcrime. https://insightcrime.org/es/noticias/analisis/colombia-ecuador-violencia-frontera-migracion-criminal/?utm_source=chatgpt.com
- Bravo-Grijalva, R. R.-R.-C. (2020). Crimen organizado y cadenas de valor: el ascenso estratégico del Ecuador en la economía del narcotráfico. Revista Latinoamericana de Estudios en Seguridad, 2.
- Calderón Ramos, J. (1 de Febrero de 2012). Tensiones por el control territorial en la frontera con el Ecuador: amenazas a la seguridad societal de comunidades indígenas. Caso del pueblo de los Pastos. Tesis Maestría . Quito , Flacso, Ecuador : Flacso .
- Castillo, A. C. (2023). El COT y la situación fronteriza de la Amazonía: identificación de actores y principales conflictos. En A. C. Castillo, El crimen organizado en la

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

- Amazonía: escenario de desafíos para la seguridad regional, del grupo de investigación “Masa crítica”, (pág. 60). Bogota: Sello Editorial ESDEG.
- corpoamazonia. (sf de sf de sf). Obtenido de corpoamazonia: <https://www.corpoamazonia.gov.co/region/putumayo/Putumayo-agenda.html>
- crime, i. (8 de Septiembre de 2021). insightcrime. <https://insightcrime.org/es/investigaciones/mineria-ilegal-amazonia-colombiana/>
- crisisgroup. (17 de julio de 2024). www.crisisgroup.org. [www.crisisgroup.org: https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/south-america/brazil-colombia-peru/b51-three-border-problem?utm_source=chatgpt.com](https://www.crisisgroup.org/es/latin-america-caribbean/south-america/brazil-colombia-peru/b51-three-border-problem?utm_source=chatgpt.com)
- Erazo, K. (14 de septiembre de 2023). www.pares.com : <https://www.pares.com.co/post/putumayo-bajo-la-sombra-de-la-coca-informe-de-la-unodc-revela-aumento-de-cultivos-en-la-region>
- Fernando Conde, M. O. (2020). Grupos irregulares armados en el conflicto de la frontera colombo-ecuatoriana y su relación con el narcotráfico. *Military Review*, 14.
- Giroux, H. (1997). .La pedagogía de frontera y la política del postmodernismo. *Revista Intringulis*(6), 96.
- Lugo, V. P. (09 de Abril de 2025). Los Comandos de la Frontera imponen nuevos controles en el Putumayo mientras negocian con el Gobierno. *El pais* , pág. 13.
- Lugo, V. P. (09 de abril de 2025). Los Comandos de la Frontera imponen nuevos controles en el Putumayo mientras negocian con el Gobierno. *El pais* , pág. 13.
- Lugo, V. P. (29 de noviembre de 2024). Los grupos narcotraficantes de Colombia y Ecuador se enfrentan en la frontera amazónica por el negocio de la coca. *El Pais* , pág. 11.
- LUGO, V. P. (29 de NOVIEMBRE de 2024). Los grupos narcotraficantes de Colombia y Ecuador se enfrentan en la frontera amazónica por el negocio de la coca. *EL PAIS* , pág. 11.
- Margalef, L., & Arenas, A. (2006). ¿Qué entendemos por innovación Educativa? A proposito del desarrollo curricular. *Perpectiva Educacional*, 1(47), 13-31.
- McDermott, J. (2020). Chronicle of a Threat Foretold: the ex-FARC Mafia. *insight crime*, 72.

- Montero, D. (1 de Noviembre de 2023). lasillavacia.com. La silla vacia : https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/deforestacion-mineria-y-narcotrafico-acorralan-a-indigenas-de-la-amazonia/?utm_source=chatgpt.com
- Montero, D. (1 de noviembre de 2023). la silla vacia . https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/deforestacion-mineria-y-narcotrafico-acorralan-a-indigenas-de-la-amazonia/?utm_source=chatgpt.com
- Muñoz E., L. A. (1993). Subversión, narcotráfico y delincuencia en el área: Informe de viaje de investigación a la región nor-oriental, del Ecuador (provincia de Sucumbíos y Napo). Quito : Quito, Ecuador IAEN.
- putumayo, C. d. (2023). www.fronteramazonica.com. Obtenido de <https://fronteramazonica.com/putumayo/>
- Ramos, S. M. (16 de mayo de 2025). www.pares.com.co. Obtenido de Pares : https://www.pares.com.co/post/comandos-de-frontera-y-su-presencia-en-el-norte-de-ecuador?utm_source=chatgpt.com
- RAMÍREZ, M. C. (2022). reconfiguración del conflicto armado en coyunturas de transición: nuevas y viejas dinámicas de los grupos armados no estatales y su incidencia en la vida cotidiana de la población civil de putumayo, colombia. *scielo* , 23.
- reconciliacion, F. p. (s.f.). Presencia de comandos de frontera frontera norte ecuador-Colombia. Comandos de Frontera y su presencia en el norte de Ecuador. *pares* , Bogota.
- REYES, G. P. (2022). análisis del impacto del crimen transnacional organizado en las comunidades indígenas de américa latina: el caso de ecuador. *El Pacto por los Derechos Humanos* , 55.
- Rivera- jhon, r. &.-G. (2020). Crimen Organizado y cadena de valor: El ascenso estrategico del Ecuador en la economia dell Narcotrafico . *Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 28.
- Rivera, J. M. (2024). Post-insurgencias y subculturas criminales: la influencia del crimen organizado colombiano en el conflicto armado de Ecuador. *Small Wars Journal* , 17.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
Bogotá D.C., Colombia

Rodriguez, S. (17 de octubre de 2023). <https://es.mongabay.com>. [www.mongabay.com](https://es.mongabay.com):
https://es.mongabay.com/2023/10/parque-la-paya-en-putumayo-azotado-por-el-narco/?utm_source=chatgpt.com

Roselli, N. (2011). Teoría del aprendizaje colaborativo y la teoría de la representación social: convergencias y posibles articulaciones. *Revista colombiana de Ciencias Sociales*, 2(2), 173-191.

Slavin, R. (2002). *Aprendizaje cooperativo: Teoría, investigación y práctica*. AIQUE.

Vélez, J. (22 de Febrero de 2025). El Parque Nacional La Paya, otra víctima del poder de los Comandos de la Frontera en Putumayo. *el país*, pág. 11.

www.acaps.org. (22 de diciembre de 2023). Obtenido de acaps:
https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Additional_resources/20231222_ACAPS_Colombia_Analysis_Hub_Crises_to_watch_at_the_Colombia-Ecuador_border_Spanish.pdf